



Asamblea General

Distr. general
2 de noviembre de 2004
Español
Original: inglés

Quincuagésimo noveno período de sesiones

Tema 122 del programa

**Financiación del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento
de los presuntos responsables de las violaciones graves del
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio
de la ex Yugoslavia desde 1991**

Primer informe de ejecución del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia para el bienio 2004-2005

Informe del Secretario General*

Resumen

El primer informe de ejecución del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia para el bienio 2004-2005 se presenta de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 58/255 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 2003. El informe refleja la necesidad de obtener nuevas consignaciones por un valor de 26,8 millones de dólares, que no incluyen las contribuciones del personal, además de la consignación inicial para el bienio 2004-2005. El aumento de las necesidades se debe, entre otras cosas, a modificaciones respecto de los tipos de cambio como resultado de la devaluación del dólar de los Estados Unidos en relación con el euro y a un crédito para la División de Investigaciones para 2005. Se pide a la Asamblea que apruebe la consignación revisada para 2004-2005 por un monto de 329.501.900 dólares en cifras brutas (298.437.000 dólares en cifras netas) para la Cuenta Especial para el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.

* El informe se retrasó debido a las extensas consultas realizadas con el Tribunal.



Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción.	1-5	3
II. Explicación de los cambios de las necesidades netas.	6-40	5
A. Variaciones de las hipótesis presupuestarias.	7-10	5
B. Necesidades de recursos de la División de Investigaciones para 2005.	11-40	6
III. Conclusiones y recomendaciones.	41-42	15
Anexos		
I. Hipótesis presupuestarias relativas al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia para el bienio 2004-2005.		16
II. Descripción de las funciones relacionadas con la investigación.		17
III. Funciones del equipo de transición.		19
IV. Proyecto de organigrama de la División de Investigaciones para 2005.		21
V. Informe sobre los progresos realizados en el sistema de asistencia letrada.		22

I. Introducción

1. El objetivo principal del primer informe de ejecución es determinar los ajustes requeridos como consecuencia de las variaciones de la tasa de inflación, los tipos de cambio y los valores de referencia utilizados para el cálculo inicial de las consignaciones.
2. No obstante, cabe recordar que cuando la Asamblea General, en su resolución 58/255 de 23 de diciembre de 2003, aprobó la consignación inicial para el Tribunal, para el bienio 2004-2005 con un monto de 298.226.300 dólares en cifras brutas (271.670.600 dólares en cifras netas), decidió aplazar el examen de los recursos necesarios para la División de Investigaciones para 2005 hasta su quincuagésimo noveno período de sesiones y pidió al Secretario General que volviera a presentar una propuesta en el contexto de su primer informe de ejecución para el bienio 2004-2005. Al mismo tiempo, se pidió al Secretario General que se asegurara de que las propuestas relativas a la División de Investigaciones para 2005 fueran suficientes para que la estrategia para dar término a la labor del Tribunal pudiera ejecutarse eficazmente.
3. En consecuencia, el presente informe contiene tanto los ajustes técnicos del primer informe de ejecución como las necesidades de recursos de la División de Investigaciones para 2005. También se tiene en cuenta un ajuste de 6.747.700 dólares por una sola vez, resultante de los ahorros derivados de las medidas de economía aplicadas durante 2004.
4. El aumento neto de 26.766.400 dólares de las necesidades del Tribunal se indica a continuación en los cuadros 1 y 2. En el cuadro 1 se observan los cambios por componente y principales factores determinantes, y en el cuadro 2 los cambios por objeto de los gastos y principales factores determinantes.
5. En los párrafos 7 a 10 *infra* se explican detalladamente las variaciones de los parámetros de costos utilizados para calcular las consignaciones iniciales. Además, en el anexo I se enumeran las hipótesis presupuestarias utilizadas en las consignaciones iniciales para el bienio 2004-2005 y las tasas que ahora se proponen en el presente informe.

Cuadro 1

Resumen de los gastos e ingresos previstos por componente y principales factores determinantes

(En miles de dólares EE.UU.)

Componente	Consignación para 2004-2005 ^a	Cambios proyectados				Total	Consignación revisada propuesta
		Tipo de cambio	Inflación	Valor de referencia	Otras variaciones ^b		
Salas	9 368,7	161,5	(7,3)	—	—	154,2	9 522,9
Oficina del Fiscal	75 407,0	6 806,4	(1 474,1)	364,9	15 240,4	20 937,6	96 344,6
Secretaría	213 450,6	17 642,0	(549,3)	(161,2)	—	16 931,5	230 382,1
Gasto total (cifras brutas)	298 226,3	24 609,9	(2 030,7)	203,7	15 240,4	38 023,3	336 249,6
Ingresos							
Contribuciones del personal	26 371,7	866,6	440,4	916,4	2 285,8	4 509,2	30 880,9
Otros ingresos	184,0	—	—	—	—	—	184,0
Total de necesidades (neto)	271 670,6	23 743,3	(2 471,1)	(712,7)	12 954,6	33 514,1	305 184,7
Economías proyectadas para 2004							(6 747,7)

Componente	Consignación para 2004-2005 ^a	Cambios proyectados				Total	Consignación revisada propuesta
		Tipo de cambio	Inflación	Valor de referencia	Otras variaciones ^b		
Total de necesidades (neto) teniendo en cuenta las economías							298 437,0

^a Aprobada en la resolución 58/255.

^b Recursos para la División de Investigaciones para 2005.

Cuadro 2

Resumen de los gastos proyectados por objeto de los gastos y principales factores determinantes

(En miles de dólares EE.UU.)

Objeto de los gastos	Consignación para 2004-2005 ^a	Cambios proyectados				Total	Consignación revisada propuesta
		Tipo de cambio	Inflación	Valor de referencia	Otras variaciones ^b		
Puestos	135 922,1	12 959,4	(1 991,1)	(712,7)	11 960,3	22 215,9	158 138,0
Otros gastos de personal	26 008,7	2 325,8	(104,8)	—	—	2 221,0	28 229,7
Sueldos y prestaciones de los magistrados	9 177,3	158,2	(7,1)	—	—	151,1	9 328,4
Consultores y expertos	657,3	58,6	(2,6)	—	—	56,0	713,3
Viajes	7 713,8	—	0,2	—	994,3	994,5	8 708,3
Servicios por contrata	56 557,0	5 057,0	(222,8)	—	—	4 834,2	61 391,2
Gastos generales de funcionamiento	24 617,1	2 201,1	(97,9)	—	—	2 103,2	26 720,3
Atenciones sociales	12,7	1,2	(0,1)	—	—	1,1	13,8
Suministros y materiales	2 832,0	253,1	(11,6)	—	—	241,5	3 073,5
Mobiliario y equipo	7 731,3	691,7	(31,6)	—	—	660,1	8 391,4
Mejora de locales	416,5	37,2	(1,7)	—	—	35,5	452,0
Subvenciones y contribuciones	208,8	—	—	—	—	—	208,8
Contribuciones del personal	26 371,7	866,6	440,4	916,4	2 285,8	4 509,2	30 880,9
Total (cifras brutas)	298 226,3	24 609,9	(2 030,7)	203,7	15 240,4	38 023,3	336 249,6
Ingresos							
Contribuciones del personal	26 371,7	866,6	440,4	916,4	2 285,8	4 509,2	30 880,9
Otros ingresos	184,0	—	—	—	—	—	184,0
Total (cifras netas)	271 670,6	23 743,3	(2 471,1)	(712,7)	12 954,6	33 514,1	305 184,7
Economías proyectadas para 2004							(6 747,7)
Total teniendo en cuenta las economías							298 437,0

^a Aprobada en la resolución 58/255.

^b Recursos para la División de Investigaciones para 2005.

II. Explicación de los cambios de las necesidades netas

6. Los cambios resultantes de los principales factores determinantes indicados en los cuadros 1 y 2 supondrían un aumento de 31.275.600 dólares en las necesidades de fondos, para lo cual se requeriría una consignación total revisada de 329.501.900 dólares (en cifras brutas), que se desglosaría de la siguiente manera (en miles de dólares EE.UU.):

Consignación ^a	298 226,3	
A. Variaciones de las hipótesis presupuestarias		
Variaciones de los tipos de cambio	24 609,9	Basadas en los tipos de cambio operacionales de las Naciones Unidas
Variaciones de las hipótesis relativas a la inflación	(2 030,7)	Basadas en los índices de precios al consumidor, los multiplicadores del ajuste por lugar de destino establecidos y los ajustes basados en la comparación del costo de vida real y el previsto en el presupuesto
Ajustes de los costos estándar de sueldos y los gastos comunes de personal	203,7	Basados en el análisis de las nóminas reales, las vacantes, los gastos comunes de personal, las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional y los ingresos por concepto de contribuciones del personal resultantes de la consolidación del ajuste por lugar de destino
B. Otras necesidades	15 240,4	Basadas en las necesidades proyectadas de la División de Investigaciones para 2005
Economías proyectadas para 2004	(6 747,7)	
Total revisado (cifras brutas)	329 501,9	

^a Aprobada en la resolución 58/255.

A. Variaciones de las hipótesis presupuestarias

Variaciones de los tipos de cambio y de las hipótesis relativas a la inflación (aumento: 22.579.200 dólares)

7. Se necesitaría un aumento neto de 22.579.200 dólares por el efecto de las variaciones de los tipos de cambio atribuibles principalmente a la devaluación del dólar en relación con el euro y a las variaciones de la inflación prevista. En el presente informe de ejecución se aplicaron los tipos de cambio reales al período comprendido entre enero y octubre de 2004 y el tipo de cambio vigente en octubre de 2004 se aplicó a noviembre y diciembre de 2004. Las cifras resultantes para 2004 se usaron también para 2005. En el segundo informe de ejecución se aplicarían los ajustes resultantes de la experiencia real en 2005. Respecto de las proyecciones revisadas de las tasas de inflación aplicadas a todos los objetos de gastos en La Haya, éstas se basan en los multiplicadores reales del ajuste por lugar de destino para el período comprendido entre enero y octubre de 2004 y en las proyecciones basadas en datos utilizados por la Comisión de Administración Pública Internacional, así como en la información más reciente disponible sobre los índices de precios al consumidor y los ajustes basados en la comparación del costo de vida real con el previsto en el presupuesto.

Ajustes de los costos estándar (*aumento: 203.700 dólares*)

8. El aumento de 203.700 dólares relacionado con los ajustes de los costos estándar reflejan el efecto neto de las variaciones de los costos estándar de sueldos, los gastos comunes de personal, las tasas de vacantes, y las tasas de contribuciones del personal. Las revisiones de los costos estándar de sueldos para 2004 se basan en los promedios reales en lo que va del bienio, por cuadro y categoría. Las proyecciones para 2005 se basan en las tendencias observadas en 2004.

9. Los gastos comunes de personal se calculan en el presupuesto como porcentaje de los sueldos netos. Esos gastos están relacionados con las prestaciones y los subsidios, y con el nombramiento, el traslado y la separación del servicio de los funcionarios, y tienen que ver con la relación efectiva entre los gastos comunes de personal y los sueldos para el bienio 2002-2003.

10. En su resolución 58/255, la Asamblea General decidió que para los cálculos del presupuesto para el bienio 2004-2005 se utilizara una tasa media de vacantes del 10,2% para los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores y del 7,3% para los funcionarios del cuadro de servicios generales y cuadros conexos. Si bien la tasa media de vacantes para el bienio sólo puede determinarse al final de éste, la experiencia en lo que va del bienio indica que el nivel efectivo de vacantes en 2004 ha sido del 9,5% para el personal del cuadro orgánico y categorías superiores y del 7,9% para el personal del cuadro de servicios generales y cuadros conexos. Los ajustes de los costos estándar para reflejar el factor de vacantes real de 2004 afectaron únicamente las necesidades presupuestarias para 2004 y no tendrían efecto sobre la capacidad del Tribunal para contratar en 2005, siempre que termine la congelación de la contratación debida a la situación financiera del Tribunal. Para los fines de los cálculos presupuestarios para 2005, se han mantenido las tasas de vacantes del 10,2% para el personal del cuadro orgánico y categorías superiores y del 7,3% para el personal del cuadro de servicios generales y cuadros conexos correspondientes a la consignación inicial.

B. Necesidades de recursos de la División de Investigaciones para 2005

Cuadro 3

Necesidades de puestos de la División de Investigaciones para el bienio 2004-2005

Cuadro	2004	2005		Reducción neta
		Enero	Julio	
Cuadro orgánico y categorías superiores				
D-1	1	1	1	—
P-5	3	1	1	2
P-4	16	11	11	5
P-3	84	64	58	26
P-2	64	38	32	32
Subtotal	168	115	103	65
Cuadro de servicios generales				
Otras categorías	47	33	33	14
Total	215	148	136	79

11. El proyecto de presupuesto del Tribunal para el bienio 2004-2005 (A/58/226) incluía la reorganización de la División de Investigaciones en 2005 con una reducción total de 61 puestos en la División. Esa propuesta dependía de la terminación de todas las investigaciones previas a la acusación hasta el 31 de diciembre de 2004 con arreglo a las metas de la estrategia de conclusión. En la propuesta se tuvo también en cuenta que la Oficina del Fiscal necesitaba mantener una capacidad básica de investigación para seguir prestando apoyo en los juicios y apelaciones después de 2004 y en el traslado a los tribunales nacionales de las causas y los expedientes de investigación en virtud a la regla 11 bis. Al mismo tiempo, de conformidad con la resolución 57/288 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 2003, el proyecto de presupuesto incluía la abolición de 43 puestos (34 puestos del cuadro orgánico a partir del 1º de julio de 2005 y 9 puestos del cuadro de servicios generales a partir del 1º de enero de 2005) en la División de Investigaciones y la redistribución de 18 puestos de la División a otros sectores prioritarios del Tribunal. En su resolución 58/255, la Asamblea General aprobó la redistribución de 18 puestos de la División a otros sectores prioritarios del Tribunal a partir de enero de 2005.

12. En su informe sobre el presupuesto del Tribunal para el bienio 2004-2005 (A/58/449), la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto destacó que, sobre la base del documento del presupuesto o la información complementaria proporcionada a la Comisión, el proceso de determinación del número de puestos que se habían de suprimir, redistribuir o mantener no parecía ser transparente ni estaba respaldado por un análisis pormenorizado de los indicadores del volumen de trabajo. La Comisión pidió que se supervisase de manera permanente el volumen de trabajo y el ritmo de cumplimiento de las actividades conexas, en particular en la Oficina del Fiscal, a fin de determinar si se podían suprimir algunos de los puestos o liberarlos para su asignación a otras esferas del Tribunal antes del segundo semestre de 2005. Con sujeción a esa petición y a fin de asegurar el cumplimiento de la estrategia de conclusión, la Comisión recomendó que se aceptara la capacidad de personal propuesta para la Oficina del Fiscal.

13. En su resolución 58/255, la Asamblea General aprobó la plantilla propuesta para el Tribunal para el bienio 2004-2005, como recomendó la Comisión Consultiva, salvo los recursos relacionados, con puestos y no relacionados, propuestos para la División de Investigaciones para 2005, respecto de los cuales decidió aplazar el examen hasta su quincuagésimo noveno período de sesiones. A ese respecto, la Asamblea pidió al Secretario General que volviera a presentar en el contexto del primer informe de ejecución relativo al Tribunal para el bienio 2004-2005, una propuesta sobre los recursos necesarios para la División de Investigaciones para 2005, y se asegurara de que la propuesta fuera suficiente para que la estrategia de dar término a la labor del Tribunal pudiera ejecutarse eficazmente. Respondiendo a esa petición, el Tribunal, basándose en la experiencia adquirida durante 2004, reevaluó sus necesidades relativas al personal de investigación que se requerirá para prestar apoyo a la Oficina del Fiscal en la realización de las actividades posteriores al enjuiciamiento y previas al juicio, y las correspondientes al juicio y a la apelación a partir del 1º de enero de 2005.

14. Cabe recordar que la estrategia general de conclusión del Tribunal comprende dos cuestiones fundamentales: a) la conclusión imparcial y rápida de los juicios del Tribunal de conformidad con los plazos establecidos en la estrategia; y b) la transición de la acusación internacional a la nacional, de conformidad con la regla 11 bis, mediante el traslado a tribunales nacionales de la región de determinadas causas

contra personas enjuiciadas por el Tribunal. Además del traslado de esas causas, la fiscalía proporcionará a los fiscales nacionales de la región los expedientes de investigación y otro material para el posible enjuiciamiento de las personas investigadas pero no efectivamente enjuiciadas por el Tribunal. Con la conclusión prevista para el 31 de diciembre de 2004 de todas las investigaciones previas al enjuiciamiento, en la División de Investigaciones se hará una reestructuración y una redistribución de recursos a fin de concentrar sus esfuerzos en el apoyo a esas dos cuestiones.

15. A fin de velar por que el Tribunal alcance los objetivos de su estrategia de conclusión, es importante que la Oficina del Fiscal mantenga el ritmo y el calendario de las Salas de Primera Instancia y esté al mismo tiempo en condiciones de hacer el traslado gradual de las causas a los tribunales nacionales y los expedientes a los fiscales nacionales en virtud de la regla 11 bis. Con arreglo a la nueva estructura propuesta, la División de Investigaciones quedaría organizada con arreglo a dos componentes principales: a) el apoyo a las actuaciones previas al juicio, del juicio y de las apelaciones; y b) el apoyo para el traslado de las causas del Tribunal a los tribunales nacionales y el de los expedientes de investigación de la fiscalía a los fiscales nacionales en virtud de la regla 11 bis, mediante el establecimiento de un equipo de transición. En la estructura propuesta se prevé también la continuación en la División de un componente de servicios comunes de apoyo que abarque las funciones de gestión ejecutiva, administración y apoyo sobre el terreno.

16. Si bien todas las investigaciones estarán en la etapa de enjuiciamiento a fines de 2004, la Oficina del Fiscal deberá mantener una capacidad básica de investigación (que incluya investigadores, analistas y personal de estudio) para seguir prestando apoyo en los juicios y apelaciones después del 31 de diciembre de 2004. A fin de dotar de recursos adecuados a la nueva estructura, el Tribunal ha analizado detalladamente las funciones y la carga de trabajo posteriores al 31 de diciembre de 2004. El Tribunal llegó a la conclusión de que después del 31 de diciembre de 2004 se seguirían necesitando tres funciones conexas de investigación principales para prestar apoyo adecuado a las actividades anteriores al juicio, del juicio y de las apelaciones, a saber: actividades basadas en la investigación, el análisis y el estudio, cuyos detalles figuran en el anexo II. Durante 2004 ha disminuido la participación de la Oficina del Fiscal en las actividades durante la etapa del juicio, anteriores al juicio y de apelación, debido al uso de magistrados *ad litem*, y diariamente se han celebrado seis juicios en las Salas de Primera Instancia.

17. Durante el primer semestre de 2004 el Fiscal participó en seis juicios (Milošević; Krajišnik; Brđanin; Strugar; Hadžihasanović y Kubura; y Blagojević y Jokić, con un total de ocho acusados); la Oficina del Fiscal espera actualmente que se dicte sentencia en dos juicios (Strugar; y Blagojević y Jokić). Además, hubo cinco declaraciones de culpabilidad (Deronjić; Babić, Mrđa; Česić; y Jokić). La Oficina participa también en 12 causas en apelación de la sentencia (Blaskić; Kordić y Cerkez; Kvocka, Prcac, Kos y Zigić; Matinović y Naletelić; Stakić, Simić; Galić; Momir Nikolić; Dragan Nikolić; Jokić; Deronjić; y Brđanin) correspondientes a 17 condenados, además de cinco apelaciones interpuestas por la fiscalía. Para lo que queda de 2004 se prevé la iniciación de por lo menos otros tres juicios (Limaj y otros; Orić; y Halilović) que comprenden cinco acusados. La actividad anterior al juicio incluirá 20 causas, 6 nuevas y 14 ya iniciadas, con un total de 29 acusados (Ademi y Norac; Ljubčić; Milutinović y otros; Mrksić y otros; Martić; Stanković, Šešeljić; Stanišić y Simatović; Čermak y Markač; Prlić y otros; Mejakić y otros; Kovačević; Rajić; y Rašević).

18. Se calcula que durante 2005 habrá 20 causas en la etapa previa al juicio, 6 en la del juicio y 14 en apelación sobre el fondo que comprenderán 19 apelaciones interpuestas por la defensa y 5 por la fiscalía. Cabe recordar que para las seis Salas de Primera Instancia hay en todo momento seis equipos de acusación que trabajan en la etapa de juicio y otros seis dedicados al trabajo de preparación previa al juicio y listos para iniciar un juicio en cualquiera de las seis Salas de Primera Instancia en cuanto termine una causa. Cada uno de los equipos de acusación requeriría apoyo para el trabajo de investigación, análisis y estudio. El volumen de trabajo requerido para el apoyo a los procesos varía de una causa a otra, pero éstas son generalmente complicadas y toman mucho tiempo porque están en juego muchos factores distintos, incluso consideraciones como las relativas al tiempo transcurrido desde que se confirmó el enjuiciamiento inicial, cuántos acusados están detenidos por la misma acusación, el tipo de causa, la magnitud de la causa, el número de cargos y el grado de responsabilidad del acusado.

19. A fin de determinar la carga de trabajo total prevista, el Tribunal ha hecho un examen de todas las causas que se encuentran en la etapa previa al juicio y en la del juicio. Para facilitar ese examen, las causas se dividieron según su grado de complejidad, a saber, causas de nivel uno (líderes y autores de alto nivel) y causas de nivel dos (otros autores de hechos graves). Entre los factores considerados para determinar la complejidad de las causas figuran el número y el carácter de los cargos en el auto de acusación; las posibles enmiendas del auto de acusación; el carácter de las mociones preliminares y de las impugnaciones de la competencia del Tribunal; el número de acusados comprendidos en la misma causa; el número de testigos y documentos de que se trate; el territorio geográfico abarcado por el auto de acusación; la posición previa del acusado y la jerarquía militar o política (cuando proceda); y las cuestiones jurídicas que puedan plantearse durante el juicio.

20. Debido a su complejidad y alcance, las causas de nivel uno generan una mayor carga de trabajo. La experiencia indica que en una causa de nivel uno habrá un promedio de 300 testigos, mientras que en una de nivel dos habrá unos 150. En una causa de nivel uno habría también unas 3.000 pruebas, en comparación con 1.000 para una de nivel dos. Además, se calcula que una causa de nivel uno requeriría como promedio el examen de unos 30.000 documentos a fin de satisfacer las obligaciones en materia de revelación de pruebas de conformidad con la regla 68, mientras que en una causa de nivel dos habría unos 10.000 documentos.

1. Necesidades de recursos

21. La División de Investigaciones está dirigida por el Jefe de Investigaciones (D-1), que es responsable de la gestión general y el funcionamiento eficaz de la División, incluso la Sección de Información y Pruebas y la Dependencia de Solicitudes de Asistencia. Actualmente ayudan al Jefe en el desempeño de esas funciones tres adjuntos (P-5). Con la reducción proyectada del personal y la correspondiente reorganización de la División en 2005, ya no serán necesarios tres jefes adjuntos. La División desea conservar un puesto de P-5 para un adjunto del Jefe. Se propone que los otros dos puestos de P-5 se redistribuyan a la Dependencia de Apelaciones a partir del 1° de enero de 2005.

22. La experiencia indica que los recursos aprobados para 2004-2005 no fueron suficientes para apoyar el aumento de la carga de trabajo de la Dependencia de Apelaciones, tanto en cuanto al número de causas como a la complejidad de éstas.

Hasta ahora, casi todas las personas declaradas culpables por el Tribunal han ejercido su derecho de apelación y a llevar una causa de segundo nivel a la Sala de apelaciones. La fiscalía ha ejercido también su derecho de apelación. Además, durante el juicio se presentan numerosas apelaciones complejas relativas a cuestiones que es necesario resolver antes de poder terminar el juicio. Está previsto que en 2005 la Dependencia se ocupe de 14 apelaciones en curso, en comparación con 12 en 2004 y 10 en 2003. Se prevé que en los años próximos aumente el volumen de trabajo debido a la terminación de causas voluminosas con muchos acusados de alto nivel, por ejemplo, Milošević; Milutinović (3 acusados); Prlić (6 acusados); Limaj (3 acusados); Blagojević (2 acusados); Hadžihasanović (2 acusados); y Mrksić (3 acusados).

23. La preparación y la argumentación de las apelaciones requiere mucho trabajo sobre cuestiones jurídicas complicadas y conocimiento del expediente del juicio (un promedio de 20.000 páginas de material por causa en apelación). Al aumentar en virtud de la estrategia de conclusión la proporción de causas con autores de alto nivel y de causas con muchos acusados, aumentará el volumen y la complejidad de las apelaciones. Además, a diferencia de los juicios en los tribunales nacionales, en casi todas las causas en apelación se han presentado documentos o testigos nuevos. En las causas en apelación en 2003 se presentaron más de 5.000 páginas de documentos nuevos y se espera que en 2004 se presenten unas 3.000 páginas de documentos nuevos.

24. La complejidad y el gran número de esas apelaciones (apelaciones planteadas durante el juicio y apelaciones posteriores a la sentencia ante el tribunal de última instancia) y el nivel de asesoramiento jurídico que se ha de proporcionar a los equipos de acusación y de preparación de juicios, requieren que la Dependencia de Apelaciones cuente con un número adecuado de funcionarios de categoría superior que tengan los conocimientos y la experiencia necesarios para ocuparse de todas las causas objeto de apelación o revisión. Actualmente la Dependencia tiene en la categoría superior un asesor jurídico (P-5). Eso es insuficiente para hacer frente al aumento previsto de la carga de trabajo y la gestión de la Dependencia de Apelaciones. Para que la Dependencia pueda mantenerse al ritmo del aumento del número de apelaciones complicadas posteriores a la sentencia previstas de 2005 en adelante, se recomienda que se la refuerce con dos puestos más de asesor jurídico (P-5) transferidos de la División de Investigaciones. Con la adición de esos nuevos puestos, la Dependencia de Apelaciones se reorganizaría en tres equipos, cada uno dirigido por un asesor jurídico de categoría superior (P-5).

a) *Apoyo a procedimientos preliminares, enjuiciamientos y apelaciones*

Cuadro 4

Desglose de puestos para el componente de apoyo judicial de la División de Investigaciones

Categoría	Enero 2004	Procedimientos preliminares		Enjuiciamientos 2005	Apelaciones 2005	Total	
		Enero 2005	Julio 2005 ^a			Enero 2005	Julio 2005 ^a
P-4	11	1	1	4	1	6	6
P-3	74	21	15	25	2	48	42
P-2	58	12	8	14	—	26	22
Total	143	34	24	43	3	80	70

^a Eliminación de 10 puestos (6 de P-3 y 4 de P-2) a partir de julio de 2005 (véase párr. 26).

25. El Tribunal prevé que en 2005 haya seis juicios en curso (dos de nivel uno y cuatro de nivel dos). Se calcula que un asunto de nivel uno requeriría un complemento de cuatro investigadores y uno de nivel dos requeriría tres investigadores, lo que resultaría en una propuesta de dotación de personal de 20 investigadores de apoyo judicial (13 de categoría P-3 y 7 de categoría P-2) y tres jefes de equipo de categoría P-4 encargados de la supervisión y coordinación generales.

26. Para las actividades investigadoras de apoyo en las diligencias preliminares, el Tribunal requeriría a comienzos de 2005 una dotación de personal complementaria de 20 investigadores (13 de categoría P-3 y 7 de categoría P-2) que prestaría apoyo a 20 asuntos en la etapa preliminar. El apoyo a las actividades preliminares puede dividirse en dos categorías principales. La primera de ellas conlleva la labor necesaria para concluir y actualizar las causas inmediatamente antes de que comience el juicio (preparativos previos al juicio). Se prevé que habría 10 investigadores dedicados plenamente a esta labor en 2005. La segunda categoría conlleva la conclusión de la labor de investigación necesaria con posterioridad al procesamiento para aquellas causas en las que el procesamiento se dictará en el cuarto trimestre de 2004, que en la actualidad se calcula serán seis con 10 acusados. Se prevé que para concluir esta labor se requerirían 10 investigadores hasta el 30 de junio de 2005. Con la finalización de esta tarea, el componente de investigación en actividades preliminares estaría integrado por 10 puestos de investigación (7 de categoría P-3 y 3 de categoría P-2) tras la eliminación de 10 puestos de investigación (6 de categoría P-3 y 4 de categoría P-2) a partir del 1º de julio de 2005. El componente de apoyo a la investigación en la etapa de diligencias preliminares estaría supervisado y coordinado por un jefe de equipo de categoría P-4.

27. Para prestar apoyo a las apelaciones que se celebren en 2005 y con posterioridad a ese año se requerirá una capacidad de investigación reducida. El equipo de investigación estará integrado por dos investigadores de categoría P-3 y al frente de él habrá un jefe de categoría P-4.

28. Tomando como base lo anterior, el Tribunal requeriría un suplemento de 42 investigadores (28 de categoría P-3 y 14 de categoría P-2) para actividades directas de apoyo en las fases preliminares, de enjuiciamiento y de apelación hasta junio de 2005. En el segundo semestre de 2005, las necesidades del Tribunal se reducirían a 32 investigadores (22 de categoría P-3 y 10 de categoría P-2). Además de las necesidades previamente mencionadas, habría cinco jefes de equipo de categoría P-4 (1 de categoría P-4 para las actividades preliminares, 3 de categoría P-4 para apoyo a la etapa de enjuiciamiento y 1 de categoría P-4 para la etapa de apelación).

29. A fin de prestar apoyo a las actividades preliminares y de enjuiciamiento, en 2005 se requerirán 33 analistas e investigadores, cifra que incluye 10 analistas militares (7 de categoría P-3 y 3 de categoría P-2), 12 analistas penales (3 de categoría P-3 y 9 de categoría P-2), 10 oficiales de estudio (1 de categoría P-4 y 9 de categoría P-3) y un demógrafo (de categoría P-3).

b) *Apoyo en relación con el traslado de causas en virtud de la regla 11 bis*

Cuadro 5

Desglose de puestos del equipo de transición en la División de Investigación

<i>Categoría</i>	<i>Enero 2004</i>	<i>Enero 2005</i>	<i>Julio 2005^a</i>
P-4	—	2	2
P-3	—	8	8
P-2	—	6	5
Total	—	16	15

^a Eliminación de dos puestos de categoría P-2 a partir de julio de 2005 (véase párr. 30).

30. Para lograr los objetivos y tareas relacionados con el traslado de causas en virtud de la regla 11 bis y la remisión de los expedientes de investigación a las autoridades nacionales, la Oficina del Fiscal necesita un equipo multidisciplinario (equipo de transición) que cuente con un componente jurídico y analítico sólido, integrado por 16 funcionarios del cuadro orgánico (2 de categoría P-4, 8 de categoría P-3, y 6 de categoría P-2), que se crearía en enero de 2005 al volver a distribuir los puestos existentes en la División de Investigaciones. En el desempeño de su labor, el equipo también tomaría como base la experiencia adquirida por los asesores letrados en la tramitación de los diferentes expedientes y asuntos. Tras concluir la labor inicial necesaria para organizar y llevar a cabo el examen inicial de las causas, la plantilla se reduciría en un puesto de categoría P-2, a partir del 1° de julio de 2005. Las funciones del equipo de transición se recogen en el anexo III.

c) *Servicios de apoyo comunes*

Cuadro 6

Desglose de puestos del componente de servicios de apoyo comunes de la División de Investigaciones

<i>Categoría</i>	<i>Enero de 2004</i>	<i>Enero de 2005</i>	<i>Julio de 2005^a</i>
P-4	5	3	3
P-3	10	8	8
P-2	6	6	5
Cuadro de servicios generales (otras categorías)	47	33	33
Total	68	50	49

^a Eliminación de dos puestos de categoría P-2 a partir de julio de 2005 (véase párr. 34).

31. Las dependencias que prestan servicios comunes a los dos componentes principales de la nueva estructura de la División de Investigaciones, que se recogen en los párrafos 25 a 30 *supra*, incluyen: a) las oficinas sobre el terreno, b) la Dependencia de Rastreo e Información y c) la Dependencia de Apoyo Lingüístico y Administrativo.

2. Oficinas sobre el terreno

32. En la plantilla de 2004 figuran recursos para seis oficinas sobre el terreno: Sarajevo, Zagreb, Belgrado, Banja Luka, Pristina y Skopje, al frente de cada una de las cuales hay un jefe de misión de categoría P-4, a excepción de Banja Luka, a cuyo

frente hay un investigador de categoría P-3. Las oficinas sobre el terreno se ocupan de las relaciones con las autoridades locales en lo que respecta a la detención de los acusados, la localización de testigos y prestación de asistencia a éstos, la solicitud de información de otras organizaciones internacionales y el apoyo administrativo, logístico y en materia de seguridad al personal del Tribunal que va en misión al terreno, así como de las traducciones oficiosas y la tramitación de la documentación. A partir de 2005, las oficinas sobre el terreno también tendrán que prestar apoyo a la Oficina del Fiscal en relación con el traslado de las causas en virtud de la regla 11 bis y los expedientes de investigación a los tribunales nacionales.

33. Con la reducción de las misiones de investigación al concluir todas las investigaciones previas al procesamiento el 31 de diciembre de 2004, ya no será necesario mantener una oficina sobre el terreno en Pristina. La oficina de Skopje ha servido hasta ahora de apoyo a la oficina de Pristina y a otras operaciones de Kosovo. La oficina de Skopje se cerró el 30 de junio de 2004 y la de Pristina se cerrará el 31 de diciembre del mismo año. Con el cierre de estas dos oficinas sobre el terreno, las necesidades de las otras oficinas serán de 12 puestos del cuadro orgánico (3 de categoría P-4, 5 de categoría P-3 y 4 de categoría P-2) y 11 puestos del cuadro de servicios generales. Como resultado del cierre de las dos oficinas sobre el terreno se eliminarán cinco puestos del cuadro orgánico (2 de categoría P-4, 1 de categoría P-3 y 2 de categoría P-2) y seis puestos del cuadro de servicios generales.

3 Dependencia de Rastreo e Información

34. La Dependencia de Rastreo e Información se encarga de localizar a los acusados a fin de proporcionar información oportuna a los gobiernos, organizaciones y entidades con competencia para detenerlos. El objetivo principal son los acusados que aún están en libertad, de los que los ejemplos más notables son Radovan Karadžić y Ratko Mladić. La Dependencia también proporciona fuentes confidenciales de pruebas mediante la preparación de testigos internos y el acceso a documentos confidenciales. Hay una necesidad continua de buscar pruebas aportadas por personas que pertenecen o pertenecieron a los gobiernos, necesidad que seguirá existiendo durante el enjuiciamiento, ya que la fiscalía tiene que contrarrestar las pruebas que presente la defensa. La Dependencia cuenta con cinco puestos del cuadro orgánico (3 de categoría P-3 y 2 de categoría P-2). Previendo la detención o la entrega de fugitivos en un futuro próximo, se propone la abolición de un puesto de categoría P-2 a partir del 1º de julio de 2005.

4 Dependencia de apoyo lingüístico y administrativo

35. El apoyo administrativo y lingüístico a la División de Investigaciones se presta en la actualidad con 30 puestos del cuadro de servicios generales: 16 auxiliares de investigación, 11 auxiliares de idiomas, 1 empleado de información, 1 empleado cartógrafo y 1 auxiliar administrativo.

36. Para 2005, de acuerdo con la reestructuración de la División de Investigaciones, el número de auxiliares de investigación se reduciría de 16 a 9. El resto de los auxiliares seguiría prestando apoyo a los dos componentes principales de la División (el apoyo judicial y el equipo de transición). En lo que respecta a los auxiliares de idioma, se propone eliminar un puesto en 2005, con lo que quedarían en total 10 puestos de auxiliares de idiomas, dado que se prevé que sigan necesitándose conocimientos de idiomas en la oficina del Fiscal durante todo el bienio y con posterioridad a él. No se prevé ningún cambio en los puestos de empleado de información,

empleado cartógrafo y auxiliar administrativo. Así pues, la Dependencia contaría con 22 puestos del cuadro de servicios generales.

5. Resumen de las necesidades totales de la División de Investigaciones en 2005

37. Con arreglo a la nueva estructura propuesta, que entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2005, la División de Investigaciones estará integrada por un total de 148 puestos, que incluyen 115 puestos del cuadro orgánico y categorías superiores (1 de categoría D-1, 1 de categoría P-5, 11 de categoría P-4, 64 de categoría P-3 y 38 de categoría P-2) y 33 puestos del cuadro de servicios generales. El 1º de julio de 2005, la plantilla de la División se reduciría en 12 puestos del cuadro orgánico (6 de categoría P-3 y 6 de categoría P-2), con lo que habría un total de 136 puestos en la División durante el segundo semestre de 2005. La reducción en 2005 de 79 puestos (2 de categoría P-5, 5 de categoría P-4, 26 de categoría P-3, 32 de categoría P-2 y 14 del cuadro de servicios generales) en la División de Investigaciones supone una disminución de un 37% respecto de la plantilla de 2004. En el anexo IV figura el proyecto de organigrama de la División de Investigaciones.

38. Los recursos correspondientes a la partida de puestos y contribuciones del personal por valor de 11.960.300 dólares y 2.285.800 dólares respectivamente, cubrirán los puestos mencionados de la División de Investigaciones en 2005 y el traslado de dos puestos del cuadro orgánico (de categoría P-5) a la Dependencia de Apelaciones a partir de enero de 2005. Los gastos por concepto de contribuciones del personal se compensarían con una cantidad equivalente en la partida de contribuciones del personal.

39. En cuanto a los viajes para fines de investigación, el proyecto de presupuesto para el bienio 2004-2005 incluía necesidades por valor de 4.938.900 dólares (3.988.300 dólares para la División de Investigaciones, 553.800 dólares para la División de Acusación y 396.800 dólares para la oficina inmediata del Fiscal). La propuesta reflejaba una disminución de 1.588.100 dólares respecto de la base de consignaciones correspondiente a 2002-2003 debido principalmente a una reducción de las necesidades de viajes con fines de investigación en el bienio. Como resultado de la decisión de la Asamblea General de aplazar el examen en las necesidades de recursos de la División de Investigaciones, no se consignó la cantidad de 1.984.500 dólares para 2005.

40. Como se explicó en los párrafos anteriores, seguiría siendo necesario contar con personal de investigación para prestar apoyo a las actividades preliminares, de enjuiciamiento y de apelación en 2005. Esta labor incluirá la localización de testigos, la celebración de entrevistas con ellos, su comparecencia en virtud de la regla 92 bis, la verificación de los testigos, la impugnación de los testimonios de los testigos de la defensa, el envío de citaciones a los testigos y el registro y la incautación de material en cumplimiento de órdenes de registro. Se calcula que en 2005 se realizarán 165 misiones. Además, los miembros del equipo de transición tendrán también que realizar viajes al terreno en 2005 a fin de ponerse en contacto con testigos y comunicarse con las autoridades locales, para lo cual se calcula se realizarán 93 misiones. Por tanto, las necesidades totales para viajes oficiales de la División de Investigaciones en 2005 ascendería a 994.300 dólares.

III. Conclusiones y recomendaciones

41. El 24 de junio de 2004, se informó al Presidente de la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la grave situación financiera en que se encuentra el Tribunal debido a que los Estados Miembros no pagan con puntualidad la totalidad de las cuotas (A/58/847-S/2004/512). También se les informó de que, desde mayo de 2004, se han adoptado medidas para congelar la contratación y reducción de las operaciones. Además, el Tribunal viene recibiendo autorización desde entonces para disponer de habilitaciones de créditos con carácter mensual. Como consecuencia de todo ello, en los gastos previstos para 2004 aparece una diferencia de 6.747.700 dólares en comparación con la consignación correspondiente a 2004. Estas economías previstas para 2004 se deben principalmente a la decisión de aplazar la adquisición de bienes y servicios, al recorte de los viajes que no están relacionados con el Tribunal y a otras medidas de ahorro. Tal vez la Asamblea General desee utilizar estas economías a la hora de aprobar la consignación revisada del Tribunal para el bienio 2004-2005.

42. Por tanto, tal vez la Asamblea General desee:

- a) Tomar nota del presente informe;
- b) Aprobar la plantilla de la División de Investigaciones que figura en el cuadro 3 y el traslado de dos puestos a la Dependencia de Apelaciones para 2005;
- c) Aprobar las necesidades de recursos para viajes de investigación correspondientes a 2005 por una cantidad de 994.300 dólares;
- d) Compensar en parte las necesidades adicionales a que se hace referencia en los párrafos b) y c) *supra* con las economías previstas para 2004 de 6.747.700 dólares; y
- e) Revisar la consignación inicial para el bienio 2004-2005 por valor de 329.501.900 dólares brutos (298.437.000 dólares netos) de la Cuenta Especial del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.

Cuadro 7

Financiación del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia correspondiente al bienio 2004-2005

(En dólares EE.UU.)

	<i>Cantidad bruta</i>	<i>Cantidad neta</i>
1. Consignación inicial para 2004-2005	298 226 300	271 670 600
2. Modificaciones propuestas para el bienio 2004-2005		
a) Modificaciones en las hipótesis presupuestarias	22 782 900	20 559 500
b) Necesidades de la División de Investigaciones en 2005	15 240 400	12 954 600
c) Economías previstas para 2004	(6 747 700)	(6 747 700)
Total (a+b+c)	31 275 600	26 766 400
3. Consignaciones revisadas propuestas para 2004-2005 (1+2)	329 501 900	298 437 000

Anexo I

Hipótesis presupuestarias relativas al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia para el bienio 2004-2005

<i>Parámetros presupuestarios</i>	<i>Consignación inicial</i>		<i>Estimaciones previstas</i>	
	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>
Tipo de cambio (1 dólar EE.UU: euro)	0,89	0,89	0,82	0,82
Tasa de inflación (porcentaje)	1,90	1,90	1,40	1,50
Multiplicador del ajuste por lugar de destino (porcentaje)	38,70	38,70	44,30	45,00
Coefficiente de gastos comunes de personal (porcentaje)	42,50	42,50	40,20	40,20
Tasas de vacantes para los puestos permanentes				
Cuadro orgánico y categorías superiores (porcentaje)	10,20	10,20	9,50	10,20
Cuadro de servicios generales y categorías conexas (porcentaje)	7,30	7,30	7,90	7,30
Tasas de vacantes para los nuevos puestos				
Cuadro orgánico y categorías superiores (porcentaje)	50,00	50,00	50,00	50,00
Cuadro de servicios generales y categorías conexas (porcentaje)	40,00	40,00	40,00	40,00

Anexo II

Descripción de las funciones relacionadas con la investigación

1. A partir del 31 de diciembre de 2004 se requerirán tres funciones principales relacionadas con la investigación a fin de prestar apoyo adecuado a las actividades preliminares, de enjuiciamiento y de apelación, es decir: actividades basadas en la investigación, el análisis y el estudio.

Funciones de apoyo basadas en la investigación

2. El apoyo a la investigación sigue siendo fundamental en todo el procesamiento. En cualquier momento pueden surgir líneas de investigación nuevas e importantes. Tras la confirmación de un procesamiento, los investigadores siguen examinando, perfeccionando y documentando pruebas a fin de asegurar su admisibilidad durante el juicio. Los investigadores son también el contacto principal que existe dentro de la División de Acusación para localizar a los testigos y preparar su comparecencia en La Haya. Los investigadores se ocupan de que se realicen todos los exámenes pertinentes de todos los testigos que la acusación tiene la intención de presentar a fin de confirmar las declaraciones de éstos y cumplir las obligaciones de revelación de información de la fiscalía. Además, los investigadores se ocupan, en colaboración con otras oficinas pertinentes, de evaluar las solicitudes de medidas de protección para testigos, del apoyo logístico y de las relaciones con el gobierno anfitrión.

3. Durante la fase de enjuiciamiento, el apoyo a la investigación sigue siendo fundamental para que la fiscalía gane la causa. Los investigadores tienen que ayudar a evaluar la nueva información y las pruebas que presenta la defensa así como el material que proporcionan diferentes gobiernos durante las fases preliminar y de enjuiciamiento. Siempre es necesario que la investigación prosiga durante la fase de enjuiciamiento. Los testigos presentan a menudo información nueva en las sesiones de verificación, lo que requiere investigación adicional y a veces la corroboración de dicha información. Para ello los investigadores tienen que localizar nuevos testigos y pruebas. Durante la actuación de la defensa, se presentan pruebas cuya precisión y veracidad debe verificarse. En estos casos, los investigadores buscan documentos y testigos que permitan a la fiscalía realizar las repreguntas de manera eficaz y preparar argumentos sólidos para rebatirlas. Además, periódicamente se pide a los investigadores que comparezcan ante el Tribunal como testigos, función que no puede desempeñar el personal jurídico de la fiscalía. Debe señalarse que el tipo de apoyo que se requiere de los investigadores de la Oficina del Fiscal durante el proceso es el apoyo con el que ya cuentan las fiscalías en las jurisdicciones nacionales al disponer de agentes de policía especializados que les prestan asistencia continuamente a lo largo del proceso.

4. Durante la etapa de apelación, en la que también cabe la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas, los investigadores realizan, en su caso, investigaciones adicionales. Puede pedírseles también que hagan estudios de material retenido por el Tribunal, o que examinen nuevos documentos o información de testigos que acaban de ser identificados o pruebas aportadas por el equipo de la defensa.

Funciones de apoyo basadas en el análisis (militar y penal)

5. La mayoría de los delitos que entran dentro de la competencia del Tribunal se cometieron en el contexto del conflicto militar de la ex Yugoslavia y por tanto es fundamental realizar un análisis especializado de los aspectos militares del conflicto. De dicho análisis se ocupa el equipo de análisis militar, que presta apoyo tanto al componente investigador como a las actuaciones fiscales de la Oficina del Fiscal. Los analistas militares realizan informes en los que analizan grupos de policía y militares organizados, así como grupos paramilitares de todas las zonas de la ex Yugoslavia. Los analistas penales prestan servicios similares a sus homólogos militares, si bien se centran en ámbitos más amplios de responsabilidad que no están vinculados específicamente con aspectos militares de la causa.

Funciones de apoyo basadas en el estudio

6. Los encargados de realizar estudios se ocupan de identificar las estructuras dirigentes de policía, civiles y militares de las partes intervinientes de los conflictos de la ex Yugoslavia. Su función principal es identificar a las personas que ostentan cargos de mando y autoridad y determinar la función de hecho y de derecho que desempeñan y las relaciones que existen entre ellos así como entre las estructuras civiles, de policía y militar. El equipo recopila y examina todas las pruebas y el material disponibles. Asimismo prepara razonamientos basados en hechos para los equipos de enjuiciamiento sobre el conflicto armado en zonas de la ex Yugoslavia, elemento importante en la mayoría de los procesamiento de la Oficina del Fiscal y en los juicios. Los resultados de este estudio se incorporan periódicamente en los procesos judiciales y en los correspondientes informes fiscales a lo largo de todo el juicio. Además, habida cuenta de su alto nivel de conocimientos especializados, los miembros del equipo de investigación son llamados periódicamente a comparecer como testigos en las vistas.

Anexo III

Funciones del equipo de transición

1. En apoyo del segundo pilar de la estrategia de conclusión, en el proyecto de presupuesto para el bienio 2004-2005 se incluía el establecimiento de un equipo de transición mediante la redistribución de puestos dentro de la División de Investigaciones a fin de supervisar: a) la preparación del traslado de las causas en virtud de la regla 11 bis del Tribunal a los tribunales nacionales de Bosnia y Herzegovina o a otros tribunales en apoyo de la estrategia de conclusión; y b) la preparación de expedientes de investigación de todos los demás responsables de crímenes de guerra de nivel inferior identificados durante las investigaciones, a fin de remitir dichos expedientes a las autoridades competentes de los países de la ex Yugoslavia.

2. El traslado o la remisión de las causas a las autoridades nacionales de la ex Yugoslavia y de otros Estados tiene que examinarse en tres partes.

a) En primer lugar, se espera que algunas de las causas que afectan a acusados que están procesados en la actualidad y que no son los dirigentes de más alto rango responsables de crímenes que entran dentro de la competencia del Tribunal puedan ser remitidos a las jurisdicciones nacionales para su enjuiciamiento en aplicación de lo dispuesto en la regla 11 bis de las Reglas de procedimiento y prueba del Tribunal. Dado que muchos acusados fueron detenidos en Bosnia y Herzegovina o habían cometido presuntamente crímenes allí, se espera que la mayoría de estos asuntos se remitan a la Sala de Crímenes de Guerra de Sarajevo, que se está creando bajo los auspicios de la Oficina del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina en colaboración con el Tribunal. Se espera que la Sala esté en funcionamiento a principios de 2005 y que las remisiones en virtud de la regla 11 bis puedan comenzar por esa fecha. La Fiscalía prevé que pueden remitirse a las jurisdicciones nacionales 12 causas que afectan a 22 personas.

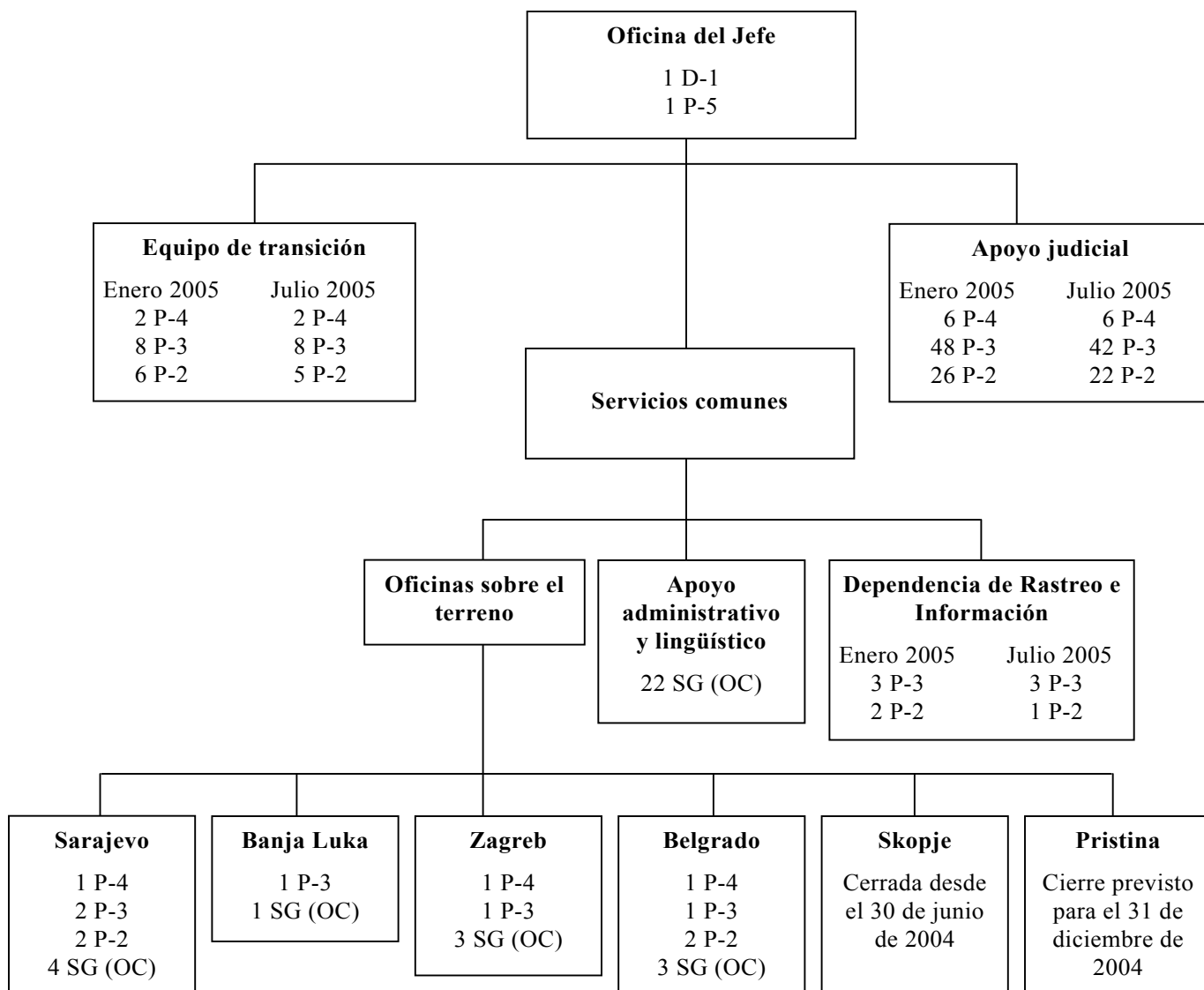
b) En segundo lugar, hay asuntos en que los inculpados son responsables de nivel medio que no serán procesados por el Tribunal. En esta categoría, se han concluido 19 investigaciones con unos 67 sospechosos. La Fiscalía tiene la intención de traspasar la responsabilidad para seguir investigando y procesar en última instancia a todos los implicados en estos asuntos a las autoridades locales de la ex Yugoslavia. Se prevé que, de estas 19 causas, se remitan 14 (con 50 sospechosos) a la Fiscalía del Tribunal Nacional de Bosnia y Herzegovina; tres causas (con 10 sospechosos) se remitan a las autoridades locales de Croacia; una causa (con seis sospechosos) se remita a las autoridades locales de Serbia y Montenegro; y una causa acumulada se remita a la Fiscalía de la ex República Yugoslava de Macedonia.

c) En tercer lugar figuran todos los responsables de nivel inferior que se han identificado en el transcurso de las investigaciones realizadas por el Tribunal desde 1994. En esta categoría hay miles de sospechosos. Muchos de ellos están acusados de delitos muy graves que entran dentro de la competencia del Tribunal, pero por el grado relativamente bajo de responsabilidad, nunca se consideró que el Tribunal fuese el foro adecuado para procesar a estos sospechosos. Las pruebas relativas a estas personas se reunirán y remitirán a las autoridades nacionales para su ulterior investigación y procesamiento en los tribunales nacionales de la ex Yugoslavia, incluidos los de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro, y probablemente la ex República Yugoslava de Macedonia.

3. El equipo de transición desempeñará un papel fundamental de apoyo a estos tres tipos de causas anteriormente mencionados. En 2005, el equipo se concentrará en las causas de la categoría a), que conllevan el traslado de las causas en aplicación de la regla 11 bis. A continuación el equipo se ocupará de las causas de la categoría b). Esta labor entrañará principalmente el contacto con los testigos para ver si están de acuerdo en que se trasladen sus declaraciones, la revisión de todas las pruebas de la causa, la decisión de formato en que se trasladarán las pruebas y la solicitud de permisos para revelar información en aplicación de la regla 70 (materia confidencial). Entre otras tareas relacionadas con el traslado de las causas figurará la relación con las autoridades judiciales locales, incluido el examen con la fiscalía de la utilización de las pruebas y la supervisión de las causas locales remitidas en virtud de la regla 11 bis. El equipo de transición será fundamental en el tratamiento de estas cuestiones y se espera que su labor tenga una duración de varios años. Posteriormente, el equipo de transición podrá concentrarse en los asuntos de la categoría c).

Anexo IV

Proyecto de organigrama de la División de Investigaciones para 2005



Abreviaturas

SG (OC): Cuadro de servicios generales (Otras categorías)

Anexo V

Informe sobre los progresos realizados en el sistema de asistencia letrada

1. En su resolución 58/255, la Asamblea General instó al Tribunal a que siguiera aplicando y supervisando estrechamente las reformas de su régimen de asistencia letrada y pidió al Secretario General que informase al respecto en el primer informe sobre la ejecución del presupuesto para el bienio 2004-2005, en particular sobre las economías obtenidas en los gastos de defensa. La Asamblea también pidió al Secretario General que incluyese, cuando procediera, al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el alcance de su examen y sus recomendaciones a que se hace referencia en los párrafos 38 y 39 de su informe amplio sobre los progresos realizados por el Tribunal Internacional para Rwanda en la reforma de su régimen de asistencia letrada (A/58/366).

2. Desde su inicio, el régimen de asistencia letrada del Tribunal se ha modificado varias veces. La principal reforma se realizó en 2001 cuando la Secretaría decidió introducir un sistema de límite máximo de los pagos para todas las etapas del proceso, que aún se aplica en las etapas preliminar y de apelación. Esta medida llevó a la aplicación en 2003 de un sistema de “suma fija” para la etapa de enjuiciamiento, que combina costos máximos predeterminados con procedimientos administrativos más fáciles de emisión de facturas. La Secretaría está desarrollando en la actualidad un régimen similar para la etapa preliminar.

3. En 2001 se introdujo el concepto “indigencia parcial”, lo que permitió al Tribunal hacerse cargo de tan sólo parte de los gastos de representación de los acusados que tenían capacidad para pagar una parte de los gastos de defensa pero no la totalidad de ellos. La Secretaría creó una fórmula financiera para determinar la aportación del acusado y, en aplicación de varias decisiones de las salas, la Fórmula se revisó en 2004.

4. El investigador de la Secretaría sigue con sus pesquisas para determinar en qué casos el acusado cumple las condiciones previas para que se le asigne un asesor letrado. Además de recabar información sobre los medios de que dispone el acusado, el investigador sigue examinando posibles actividades fraudulentas del abogado defensor, incluida la práctica de reparto de los honorarios.

5. En respuesta a la resolución 58/255 de la Asamblea General, el Tribunal está examinando en la actualidad, en coordinación con el Tribunal para Rwanda, una propuesta de realizar auditorías a cargo de un equipo independiente de expertos de los gastos incurridos por los equipos de la defensa.

6. Las necesidades del sistema de asistencia letrada son importantes y se ajustan al alto grado de actividad judicial del Tribunal y a la gran cantidad de acusados que se encuentran detenidos o en libertad condicional. En 2003, las Salas anularon varias decisiones sobre indigencia parcial y examinaron diversas cuestiones planteadas por miembros del equipo de la defensa sobre la asignación de honorarios por parte de la Secretaría. Estas decisiones han obligado a la Secretaría a adaptar sus políticas y, en determinadas ocasiones, a asignar recursos adicionales a los equipos de la defensa. No obstante, en general, los cambios en la administración de la asistencia letrada han dado como resultado un sistema más simplificado y racional que reduce al mínimo la posibilidad de malgastar o abusar a la vez que garantiza que los acusados reciban una representación de calidad.

7. Desde la introducción en 2003 del sistema revisado de suma fija para la etapa de enjuiciamiento, ha habido una serie de factores nuevos que han mantenido los gastos de defensa relativamente altos: a) la detención o entrega voluntaria de acusados de alto nivel, como resultado de lo cual ha aumentado el porcentaje de causas muy complejas y difíciles; y b) la cantidad imprevista de información confidencial revelada en las vistas y el recurso de las partes a la regla 115 de las Reglas de procedimiento y prueba (la denominada regla de pruebas adicionales), como resultado de la cual ha aumentado el volumen de trabajo de los equipos de la defensa. Asimismo, se prevé que el número de detenidos que reciba asistencia letrada en 2004 será superior al de los que la recibieron en el bienio anterior. Además, el tipo de cambio medio del dólar de los Estados Unidos respecto del euro en el primer semestre de 2004 ha sido aproximadamente un 8% superior al tipo presupuestado para el bienio 2004-2005. Con arreglo al sistema de pago anterior, los factores anteriores hubieran generado sin duda gastos adicionales. Sin embargo, gracias a la eficacia del nuevo sistema de pago, el Tribunal ha podido mantener bajo control dichos aumentos.

A. Indigencia

8. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto, los acusados sólo tienen derecho a recibir asistencia letrada cuando carezcan de medios para pagar su defensa.

9. Para tratar de abordar de manera más realista el problema de la indigencia del acusado, en diciembre de 2000, el Tribunal aprobó una modificación a la directriz que permite que la Secretaría pague únicamente una parte de los gastos de representación de un acusado cuando éste disponga de medios para hacer frente parcialmente a los honorarios de su asesor letrado. La determinación de la indigencia o la indigencia parcial se hace partiendo de una fórmula financiera elaborada específicamente por la Secretaría a este fin.

10. Entre junio de 2002 y junio de 2004, 11 acusados recibieron la consideración de indigentes parciales. No obstante, las decisiones de la Secretaría sobre indigencia parcial han sido recurridas en varias ocasiones ante las Salas. Desde enero de 2003, las Salas han desestimado cuatro decisiones de la Secretaría sobre indigencia parcial. En particular a las Salas le preocupaba que las familias de los acusados se vieran obligadas a vender el hogar familiar para pagar los gastos de la defensa. En febrero de 2004, se dio instrucciones a la Secretaría de que revisara el sistema y examinara el régimen económico matrimonial aplicable a los bienes de los acusados y sus cónyuges.

11. En mayo de 2004, la Secretaría modificó su política para asegurarse de que las familias de los acusados pudieran hacer frente a sus gastos de subsistencia mientras que éstos permanecían detenidos. La nueva política se basa en los sistemas de asistencia letrada anglosajón y de derecho romano y excluye de la contribución del acusado las necesidades vitales que tiene la familia para mantener un nivel de vida razonable. En la práctica, la nueva política requerirá que un acusado con pocos medios contribuya menos a los gastos de su defensa de lo que lo hacía con arreglo a la fórmula anterior y que un acusado con más medios contribuya más.

12. La aplicación de la fórmula de indigencia parcial, incluso antes de la revisión realizada recientemente, ha dado lugar a economías importantes en los honorarios de los abogados defensores. Desde diciembre de 2002, las decisiones de la Secretaría sobre indigencia parcial, una vez aplicadas plenamente, permitirán ahorrar

aproximadamente 1,5 millones de dólares. La Secretaría espera que las decisiones que se adopten en el futuro sobre indigencia parcial sean apoyadas por las Salas. Si bien la fórmula de indigencia parcial ahorra gastos, el sistema tiene sus problemas: los acusados que se consideran parcialmente indigentes a menudo se niegan a pagar a sus asesores letrados. Como resultado de ello, éstos tienen que representar a sus clientes recibiendo honorarios inferiores, lo que puede dar lugar a una interrupción del proceso, que incluya entre otras cosas el que el asesor letrado abandone la causa o se niegue a hacerse cargo de ella desde un principio. A menos que este problema se resuelva de manera adecuada, cabe esperar que haya demoras en los procesos y, por consiguiente, se vean afectados los objetivos de la estrategia de conclusión.

B. Honorarios de los abogados defensores

Diligencias preliminares y apelación

13. En 2001, el Tribunal presentó un sistema revisado de límite máximo de los pagos para las etapas preliminar y de apelación cuando quedó claro que era necesario mejorar el sistema anterior, en el que no existía ningún límite máximo de los pagos para cada etapa del proceso. Al revisarlo se emplearon diversos métodos para racionalizarlo y simplificarlo, en particular mediante el establecimiento de una remuneración total máxima para cada una de las etapas del proceso, dependiendo de la complejidad de éste.

14. Al aplicar el sistema de límite máximo de los pagos han surgido una serie de problemas. La fase preliminar puede durar más de lo previsto y algunos equipos de la defensa agotan todos los fondos asignados al principio de la fase inicial de las diligencias preliminares al presentar facturas elevadas. Para tratar de mantener la integridad del sistema de límite máximo de los pagos, y en particular evitar que se beneficien los abogados defensores, que podrían haber gestionado mal los recursos en la primera parte del proceso, la Secretaría se ha negado generalmente a conceder fondos adicionales. Los equipos de la defensa han recurrido continuamente estas decisiones: desde agosto de 2003, se han presentado 28 recursos. Como los asesores letrados no han recibido remuneración entretanto, también se ha dicho que las decisiones de la Secretaría han ido en perjuicio del derecho del acusado a un juicio justo. Además, en algunos casos, los cambios de estrategia iniciados por la fiscalía han afectado al volumen de trabajo y a la estrategia de la defensa haciendo que los límites máximos sean injustos y requiriendo que la Secretaría concediera excepciones. Estas situaciones han dado lugar a un aumento importante del volumen de trabajo de la Secretaría, y a veces de las Salas, ya que las decisiones de la Secretaría han tenido que ser evaluadas, explicadas, defendidas y a veces recurridas ante las Salas.

15. Habiendo reconocido las ventajas del sistema de suma fija para el enjuiciamiento, como se describe en los párrafos 17 a 21 *infra*, a principios de 2004, la Secretaría entró en contacto con la Asociación de Abogados Defensores a fin de examinar la posibilidad de ampliar el enfoque de la suma fija a la etapa preliminar. Se espera que el sistema de suma fija que se está examinando permita controlar y prever mejor los gastos relativos a los honorarios de la defensa y simplificar el proceso de presentación de facturas, tanto en lo que respecta a la defensa como a la Secretaría. Se espera que la Secretaría ponga en marcha el nuevo sistema de la etapa preliminar, en consulta con la Asociación de Abogados Defensores, a finales de 2004.

16. El sistema de límites máximos de la fase de apelaciones está funcionando razonablemente bien. Por tanto, la Secretaría considera que en este momento su modificación no aportaría ventajas importantes al Tribunal.

Enjuiciamiento

17. En julio de 2002, el Tribunal apoyó la creación y aplicación de un verdadero sistema de “suma fija” para los juicios que se celebraran en el futuro y la Secretaría puso en marcha un sistema para todos los juicios que se iniciaran a partir de 2003.

18. Dado que los honorarios se determinan previamente, antes del comienzo del juicio, los gastos totales que se cubren con el sistema de suma fija son previsibles y no es fácil ajustarlos. En circunstancias normales, si la etapa de enjuiciamiento termina antes de lo previsto, la defensa podrá cobrar la totalidad de la suma; por el contrario, si el proceso se prolonga, la defensa no recibirá ningún pago adicional. Así pues, el sistema de suma fija constituye un gran incentivo para que los abogados de la defensa trabajen con eficacia y no prolonguen los juicios.

19. Desde agosto de 2004, el sistema de pago de suma fija se ha aplicado en cuatro procesos de los que ha conocido el Tribunal: la Fiscalía contra Blagojević y Jokić, la Fiscalía contra Hadžihazanović y Kubura, la Fiscalía contra Strugar y la Fiscalía contra Krajišnik. Tomando como base la experiencia obtenida por la Secretaría hasta la fecha, el sistema ha demostrado mayor eficacia ya que reduce el volumen de trabajo en lo que respecta a la revisión de facturas y permite que los servicios judiciales de la Secretaría dediquen su atención a cuestiones más urgentes. Los equipos de la defensa no tienen que presentar más que una factura pro forma al mes y, al haberse suprimido los incentivos para que los abogados de la defensa sobrestimen la labor realizada, no es necesario someter las facturas a un examen crítico ni que exista un posible diálogo innecesario entre la defensa y la Secretaría. Cabe también señalar que todas las causas anteriormente mencionadas siguen el calendario previsto, o incluso lo han mejorado; la primera fase de la causa Blagojević concluyó algunas semanas antes de lo estimado.

20. Desde su puesta en marcha, el sistema ha requerido algunos ajustes. La Secretaría, tras consultar con la Asociación de Abogados Defensores, convino en aumentar los honorarios previstos a fin de incorporar los gastos de traducción e interpretación. La Secretaría también se ha puesto en contacto con la Asociación de Abogados Defensores para aclarar la razón de la política de retener los pagos finales, así como el tipo y el grado de la información que deben presentar los abogados defensores antes de recibir dicho pago. Junto con la introducción del sistema de pago de suma fija, se efectuará otra modificación al sistema de pago en la etapa de enjuiciamiento cuya finalidad es sincronizar el cálculo de la suma fija con el futuro sistema de pago de la etapa preliminar y separar los gastos de traducción e interpretación de la suma fija. Esta modificación es el resultado de las conversaciones mantenidas con la Asociación de Abogados Defensores.

21. A la fecha de presentación de este informe, la evaluación de la Secretaría es que el sistema de suma fija está funcionando bien. Parece ser rentable, permite controlar los gastos y concede a los abogados defensores más flexibilidad e independencia para la utilización de los recursos de que disponen.

C. Investigaciones financieras

22. Una de las medidas más importantes adoptadas para garantizar la integridad del sistema de asistencia letrada fue la designación de un investigador financiero en marzo de 2002. El investigador ayuda a la Secretaría a asegurarse de que únicamente los indigentes reciban el servicio de asistencia letrada y que las cuestiones de la conducta profesional están resueltas. El investigador también se ha ocupado del tema del “reparto de los honorarios”, sistema por el que el abogado defensor y el acusado acuerdan compartir los honorarios del letrado, así como de otras irregularidades financieras, como el cobro de honorarios excesivos y las tácticas para demorar el procedimiento a fin de incrementar los honorarios. El efecto disuasor de la labor del investigador ciertamente desalentará a los abogados defensores a cometer otros abusos.

23. En el futuro, la Secretaría espera que la Asociación de Abogados Defensores adopte un papel más activo en la supervisión de la conducta de sus miembros.

D. Cooperación entre Tribunales

24. En su resolución 58/255, la Asamblea General pidió al Secretario General que incluyese, cuando procediera, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el alcance de su examen y sus recomendaciones a los que se hace referencia en los párrafos 38 y 39 de su informe amplio sobre los progresos realizados sobre el Tribunal Internacional para Rwanda en la reforma de su régimen de asistencia letrada (A/58/366).

25. En respuesta a esta petición, el Tribunal está examinando en la actualidad, en colaboración con el Tribunal para Rwanda una propuesta de que un equipo independiente de expertos (que no se encuentren ni en La Haya ni en Arusha) realicen auditorías de los equipos de la defensa a fin de evaluar los gastos de éstos.

26. En abril de 2004, representantes de ambos Tribunales acordaron que el grupo de expertos independientes debería estar integrado por un experto en asistencia letrada y dos juristas pertenecientes respectivamente al sistema anglosajón y al de derecho romano. Se prevé que cada año, este equipo realice una auditoría de una causa completa o de un número muy limitado de causas de cada Tribunal, a fin de determinar si las horas facturadas fueron razonables y si la labor realizada fue necesaria.

27. Con carácter más general, ha tenido lugar una serie de intercambios entre las oficinas de asistencia letrada de ambos Tribunales, así como con el Tribunal Especial para Sierra Leona, a fin de estudiar la mejora de la coordinación y cooperación de los sistemas de asistencia letrada. Está previsto que se realicen nuevas misiones durante el resto de 2004 en las que se volverá a examinar, entre otras cosas, el establecimiento del equipo independiente de expertos y la mejora de las políticas de pagos.

E. Gastos previstos

28. Tomando como base el actual sistema de gastos, el Tribunal calcula que los correspondientes a 2004 serán de unos 14,5 millones de dólares (es decir, 29 millones de dólares para el bienio 2004-2005), en comparación con los gastos finales, de unos 25 millones de dólares, correspondientes al bienio 2002-2003, lo cual se debe

principalmente a la debilitación del dólar frente al euro. Al mismo tiempo se prevé que, durante el bienio 2004-2005, el Tribunal preste asistencia letrada a una media de 58 detenidos, en contraposición a la cifra de 55 detenidos a los que se prestó asistencia en el bienio 2002-2003. Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, las previsiones para 2004-2005 representan una disminución en términos reales/per cápita respecto de los gastos de 2002-2003.

29. Además, como se explicaba en el informe general sobre los progresos realizados por el Tribunal en la reforma del sistema de asistencia letrada (A/58/288), desde que en 2003 se introdujo el sistema de la suma fija en la etapa del enjuiciamiento, ha habido una serie de factores nuevos que han mantenido relativamente altos los gastos de la defensa: a) la detención o la entrega voluntaria de acusados de alto rango, lo que ha llevado a un aumento en el porcentaje de causas de gran complejidad y dificultad; y b) el imprevisto grado de información confidencial revelada durante las vistas y el recurso de las partes a la regla 115 de las Reglas de procedimiento y prueba (la denominada regla de la pruebas adicionales), como resultado de lo cual ha habido un gran aumento del volumen de trabajo de los equipos de la defensa.

30. En los sistemas de pago anteriores, los factores descritos en los párrafos 28 y 29 *supra* habrían generado sin duda gastos adicionales. No obstante, gracias a la eficacia del nuevo sistema de pagos, el Tribunal ha podido mantener dichos aumentos bajo control.

31. Otra ventaja del nuevo sistema de suma fija es que se espera que se acorte la duración de los juicios, pues los abogados defensores carecerán de incentivos para prolongar las causas. Si bien este hecho afecta positivamente a la estrategia de conclusión, no se traduce en sí mismo en economías en el bienio ya que cuando concluye una fase de enjuiciamiento otra causa de la etapa preliminar pasa a la etapa de enjuiciamiento. No obstante, podría decirse que, teniendo en cuenta todo el período de existencia del Tribunal, aumentarán las economías ya que los gastos generales correspondientes a los honorarios de los abogados defensores serán inferiores a lo que hubieran sido de haberse seguido el sistema de pago anterior.

F. Conclusión

32. La Secretaría, al cumplir su función de administradora del sistema de asistencia letrada, se arriesga a que las decisiones que adopte sean anuladas por las Salas y por los magistrados alegando diversas razones de administración y de políticas. Así ha ocurrido en las causas en que las Salas han considerado que se han aplicado políticas demasiado estrictas que pueden constituir una violación de los derechos de los acusados, que se presumen inocentes antes de que se demuestre su culpabilidad.

33. La administración del sistema de asistencia letrada requiere mantener un delicado equilibrio entre objetivos en conflicto, como son el mantenimiento de la igualdad de medios entre la acusación y la defensa, que garantice que el acusado tenga una defensa competente y un juicio justo, y por otra parte la gestión de un sistema con restricciones presupuestarias bien definidas. El sistema de asistencia letrada ha logrado resolver, en gran medida, las dificultades que han surgido y mantener ese equilibrio de la forma más adecuada. La labor de reforma continúa, con una racionalización prevista de los gastos y una gestión más eficaz de los recursos de asistencia letrada, a la vez que se preservan los principios de la justicia que debe cumplir el sistema de asistencia letrada.